Proyecto de Ley N° 11153/2024-CR

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

JUAN BARTOLOME BURGOS OLIVEROS

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"

CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Área de Trámite Documentario
14 MAYO 2025
RECIBIDO
Firma: Hora: 12:47

PROYECTO DE LEY QUE ESTABLECE LA CREACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL LABORAL

El congresista **JUAN BARTOLOME BURGOS OLIVEROS**, integrante del Grupo Parlamentario Podemos Perú, en ejercicio del derecho a iniciativa de formación de leyes que confiere el artículo 107° de la Constitución Política del Perú, y en concordancia con los artículos 22° inciso c), 67°, 74°, 75°, y, 76° del Reglamento del Congreso de la República, pone a consideración el siguiente Proyecto de Ley:

Fórmula legal

LEY QUE ESTABLECE LA CREACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL LABORAL

Artículo 1. Objeto y finalidad de la Ley

La Ley tiene por objeto establecer la creación del Código Procesal Laboral con la finalidad de uniformizar, modernizar y agilizar la justicia laboral.

Artículo 2. Código Procesal Laboral

Se establece la creación del Código Procesal Laboral en los siguientes términos:

CÓDIGO PROCESAL LABORAL

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo I. Principios del proceso laboral

El proceso laboral se inspira, entre otros, en los principios de inmediación, oralidad, concentración, simplicidad, celeridad, economía procesal y veracidad.

Los jueces laborales tienen el deber de aplicar el Principio Protector en sus decisiones, así como, impulsar los procesos de oficio, y, adecuar la exigencia de las formalidades al logro de los fines de los procesos laborales.

Artículo II. Ámbito de la justicia laboral

Corresponde a la justicia laboral resolver los conflictos jurídicos que se originan con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa. Tales conflictos jurídicos pueden ser

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

individuales, plurales o colectivos, y estar referidos a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. Están excluidas las prestaciones de servicios de carácter civil, salvo que la demanda se sustente en el encubrimiento de relaciones de trabajo.

Artículo III. Fundamentos del proceso laboral

En todo proceso laboral los jueces deben evitar que la desigualdad entre las partes afecte el desarrollo o resultado del proceso, para cuyo efecto procuran alcanzar la igualdad real de las partes, privilegian el fondo sobre la forma, interpretan los requisitos y presupuestos procesales en sentido favorable a la continuidad del proceso, observan el debido proceso, la tutela jurisdiccional y el principio de razonabilidad. En particular, acentúan estos deberes frente a la madre gestante y lactante, el menor de edad, la persona con discapacidad, el adulto mayor, y las personas que padecen de enfermedades terminales.

Los jueces laborales tienen un rol protagónico en el desarrollo e impulso del proceso. Impiden y sancionan la inconducta contraria a los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe de las partes, sus representantes, sus abogados y terceros.

El proceso laboral es gratuito para el prestador de servicios, en todas las instancias, cuando el monto total de las pretensiones reclamadas no supere las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Artículo IV. Competencia internacional

En las relaciones laborales internacionales en las que el contrato se celebra en un país y la relación laboral se cumple en otro, siendo el Perú uno de los países, la competencia jurisdiccional y la legislación aplicable se determinan en función de los tratados suscritos entre los Estados involucrados. A falta de tratado, se rigen por las siguientes reglas:

1. El juez peruano es competente cuando el demandado domicilia en el Perú. No obstante, es competente también si el contrato de trabajo se celebra o la relación laboral se ejecuta en el Perú o si las partes se someten expresa o tácitamente a la jurisdicción peruana.
2. La ley peruana es aplicable a las relaciones laborales cumplidas en el Perú, cualquiera fuera el lugar de celebración del contrato de trabajo, o a las relaciones laborales cumplidas en el extranjero si el contrato de trabajo se hubiera celebrado en el Perú.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

3. Para efecto de las reglas anteriores, se considera como territorio peruano, además del suelo, subsuelo, el dominio marítimo y el espacio aéreo que los cubre, las naves o aeronaves peruanas cuando se desplacen por aguas o aires internacionales, sobre las que ningún Estado ejerza soberanía.

Las relaciones laborales internacionales realizadas en las sedes diplomáticas de Estados extranjeros o de organismos internacionales acreditados en el Perú se rigen por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas y los acuerdos de Sede, respectivamente. Sin embargo, los reclamos derivados de la celebración de contratos de trabajo o la ejecución de relaciones laborales no disfrutan de exención jurisdiccional, porque se trata de actos de gestión y no de imperio.

Artículo V. Interpretación y aplicación de las normas en la resolución de los conflictos de la justicia laboral

Los jueces laborales, bajo responsabilidad, imparten justicia con arreglo a la Constitución Política del Perú, los tratados internacionales de derechos humanos y la ley. Interpretan y aplican toda norma jurídica, incluyendo los convenios colectivos, según los principios y preceptos constitucionales y los precedentes vinculantes, emanados del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia de la República.

Artículo VI. Responsabilidad de los jueces

Los procesos laborales serán tramitados en estricto orden cronológico; sin embargo, se tramitarán preferentemente las causas donde sean partes quienes tengan la calidad de madres gestantes o lactantes, personas con discapacidad, menores de edad, adultos mayores, personas que padecen de enfermedades terminales; o cuando se cuestione la protección del fuero sindical de los dirigentes sindicales.

TÍTULO
DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I
COMPETENCIA

Artículo 1. Competencia por materia de los juzgados de paz letrados laborales

Los juzgados de paz letrados laborales conocen las siguientes materias:

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

1.1 En la vía del proceso único laboral las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP).
1.2 En la vía del proceso de ejecución las pretensiones con título ejecutivo cuando la cuantía no supere las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP).
1.3 En la vía del proceso de ejecución la pretensión de cobranza de las liquidaciones de los aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador con prescindencia de la cuantía.
1.4 En la vía del proceso no contencioso las pretensiones de consignación, autorización para ingreso al centro laboral y entrega de documentos, con prescindencia de la cuantía.

Artículo 2. Competencia por materia de los juzgados especializados de trabajo
Los juzgados especializados de trabajo conocen las siguientes materias:
2.1 En proceso único laboral todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivos, originadas con ocasión de la prestación personal de servicios de naturaleza laboral, formativa o cooperativista, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios. En ese sentido, las pretensiones listadas a continuación no son taxativas. Entre otras, conoce las pretenciones relacionadas a lo siguiente:

1. El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.
2. La responsabilidad por daño patrimonial o extrapatrimonial, incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.
3. Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral.
4. El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia.
5. Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.
6. La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.
7. Los conflictos vinculados a una organización sindical y entre organizaciones sindicales, incluida su disolución.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

8. El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros.
9. El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios, exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.
10. El Sistema Privado de Pensiones.
11. La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral; y,
12. Aquellas materias que, a criterio del juez, en función de su especial naturaleza, deban ser ventiladas en el proceso único laboral.

2.2 En proceso único laboral conoce las pretensiones referidas al cumplimiento de obligaciones de dar superiores a cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP).

2.3 En la vía del proceso contencioso administrativo, conforme a la ley de la materia, los casos siguientes:

1. Pretensiones originadas en prestaciones de servicios de carácter personal efectuadas por los servidores públicos sujetos a los regímenes regulados por los Decretos Legislativos N°276, N°1057, Ley N°30057, regímenes especiales y carreras especiales al servicio del Estado; así como las pretensiones propias del Derecho de la Seguridad Social.
2. La impugnación judicial de resoluciones expedidas por el Tribunal del Servicio Civil y otros tribunales administrativos que resuelvan en materia de derecho laboral público y derecho de la seguridad social cuando las prestaciones sean otorgadas por un organismo público.
3. La impugnación contra actuaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

2.4 En la vía del proceso de ejecución las pretensiones con título ejecutivo cuando la cuantía supere las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP).

Artículo 3. Competencia por materia de las salas laborales superiores

Las salas laborales de las Cortes Superiores tienen competencia, en primera instancia, en las materias siguientes:

1. Proceso de acción popular en materia laboral, a ser tramitado conforme a la ley que regula los procesos constitucionales.
2. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral, a ser tramitada conforme a la ley de arbitraje.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

3. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva, a ser tramitada conforme al procedimiento establecido en la presente Ley.
4. Contienda de competencia promovida entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.
5. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley.
6. Las demás que señale la ley.

Artículo 4. Competencia por función

4.1 La Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República es competente para conocer los siguientes recursos:

1. El recurso de casación;
2. El recurso de apelación de las resoluciones pronunciadas por las salas laborales en primera instancia; y,
3. El recurso de queja por denegatoria del recurso de casación o apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

4.2 Las salas laborales de las cortes superiores son competentes para conocer de los siguientes recursos:

1. Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados laborales; y
2. Del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

4.3 Los juzgados especializados de trabajo son competentes para conocer de los siguientes recursos:

1. Del recurso de apelación contra las resoluciones expedidas por los juzgados de paz letrados en materia laboral; y
2. Del recurso de queja por denegatoria del recurso de apelación o por haber sido concedido en efecto distinto al establecido en la ley.

Artículo 5. Determinación de la cuantía

La cuantía está determinada por la suma de todos los extremos contenidos en la demanda, tal como hayan sido liquidados por el demandante. Los intereses, las costas, los costos y

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

los conceptos que se devenguen con posterioridad a la fecha de interposición de la demanda no se consideran en la determinación de la cuantía.

Artículo 6. Competencia por territorio

6.1 A elección del demandante, es competente el juez del lugar del domicilio principal del demandado o el del último lugar donde se prestaron los servicios.

6.2 Si los servicios se hubieran prestado en varios lugares será competente el juez de cualquiera de los mismos.

6.3 Si la demanda está dirigida contra quien prestó los servicios, solo es competente el juez del domicilio de este.

6.4 En la impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva es competente la Sala Laboral del lugar donde se expidió el laudo.

6.5 La competencia por razón de territorio solo puede ser prorrogada cuando resulta a favor del prestador de servicios.

Artículo 7. Regulación en caso de incompetencia

7.1 El demandado puede cuestionar la competencia del juez por razón de la materia, cuantía, grado y territorio mediante excepción. Sin perjuicio de ello el juez, en cualquier estado y grado del proceso, declara de oficio, la nulidad de lo actuado y la remisión al órgano jurisdiccional competente si determina su incompetencia por razón de materia, cuantía, grado, función o territorio no prorrogado.

7.2 Tratándose del cuestionamiento de la competencia del juez por razón de territorio, el demandado puede optar, excluyentemente, por oponer la incompetencia como excepción o como contienda. La competencia de los jueces de paz letrados sólo se cuestiona mediante excepción.

7.3 La contienda de competencia entre jueces de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial la dirime la sala laboral de la corte superior correspondiente. Tratándose de juzgados de diferentes distritos judiciales, la dirime la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República.

CAPÍTULO II
COMPARECENCIA

Artículo 8. Reglas especiales de comparecencia

8.1 Los menores de edad pueden comparecer sin necesidad de representante legal. En el caso de que un menor de catorce (14) años comparezca al proceso sin representante legal, el juez pone la demanda en conocimiento del Ministerio Público para que actúe según sus atribuciones. La falta de comparecencia del Ministerio Público no interfiere en el avance del proceso.

8.2 Los sindicatos pueden comparecer al proceso laboral en causa propia, en defensa de los derechos colectivos y en defensa de sus dirigentes y afiliados.

8.3 Los sindicatos actúan en defensa de sus dirigentes y afiliados sin necesidad de poder especial de representación; sin embargo, en la demanda o contestación debe identificarse individualmente a cada uno de los afiliados con sus respectivas pretensiones. En este caso, el empleador debe poner en conocimiento de los trabajadores la demanda interpuesta. La inobservancia de este deber no afecta la prosecución del proceso.

8.4 La representación del sindicato no habilita al cobro de los derechos económicos que pudiese reconocerse a favor de los afiliados.

Artículo 9. Legitimación especial

9.1 Las pretensiones derivadas de la afectación al derecho a la no discriminación en el acceso al empleo o del quebrantamiento de las prohibiciones de trabajo forzoso e infantil pueden ser formuladas por los afectados directos, una organización sindical, una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez, la Defensoría del Pueblo o el Ministerio Público.

9.2 Cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo y, en general, cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores, o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito.

Artículo 10. Defensa pública a cargo del Ministerio de Justicia

La madre gestante o lactante, el menor de edad, el adulto mayor, la persona con discapacidad y las que se encuentren con enfermedades terminales tienen derecho a la defensa pública, regulada por la ley de la materia.

CAPÍTULO III
ACTUACIONES ESPECIALES
SUBCAPÍTULO I
REGLAS DE CONDUCTA Y ORALIDAD

Artículo 11. Reglas de conducta en las audiencias

En las audiencias, el juez, cuida especialmente que se observen las siguientes reglas de conducta:

1. Respeto hacia el órgano jurisdiccional y hacia toda persona presente en la audiencia. Está prohibido agraviar, interrumpir mientras se hace uso de la palabra, usar teléfonos celulares u otros análogos sin autorización del juez, abandonar injustificadamente la sala de audiencia, así como cualquier expresión de aprobación o censura.
2. Colaboración en la labor de impartición de justicia. Merece sanción alegar hechos falsos, ofrecer medios probatorios inexistentes, obstruir la actuación de las pruebas, generar dilaciones que provoquen injustificadamente la suspensión de la audiencia, o desobedecer las órdenes dispuestas por el juez.

Artículo 12. Prevalencia de la oralidad en los procesos por audiencias

12.1 En los procesos laborales por audiencias las exposiciones orales de las partes y sus abogados prevalecen sobre las escritas sobre la base de las cuales el juez dirige las actuaciones procesales y pronuncia sentencia. Las audiencias son sustancialmente un debate oral de posiciones presididas por el juez, quien puede interrogar a las partes, sus abogados y terceros participantes en cualquier momento. Las actuaciones realizadas en audiencia, salvo la etapa de conciliación, son registradas en audio y video utilizando cualquier medio apto que permita garantizar fidelidad, conservación y reproducción de su contenido. Las partes tienen derecho a la obtención de las respectivas copias en soporte electrónico.

12.2 La grabación se incorpora al expediente. Adicionalmente, el juez deja constancia en acta únicamente de lo siguiente: identificación de todas las personas que participan en la audiencia, de los medios probatorios que se hubiesen admitido y actuado, la resolución que suspende la audiencia, los incidentes extraordinarios y el fallo de la sentencia o la decisión de diferir su expedición.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

12.3 Si no se dispusiese de medios de grabación electrónicos, el registro de las exposiciones orales se efectúa haciendo constar, en acta, las ideas centrales expuestas.

SUBCAPÍTULO II
NOTIFICACIONES

Artículo 13. Notificaciones en los procesos laborales

13.1 Las resoluciones en los procesos laborales se notifican electrónicamente.

13.2 Para efectos de la notificación electrónica, las partes y cualquier otro interviniente deben consignar en la demanda, en su contestación o solicitud de intervención una casilla electrónica asignada por el Poder Judicial, bajo apercibimiento de declararse la inadmisibilidad de tales actos postulatorios.

13.3 Sin perjuicio de la notificación electrónica, deben ser notificadas mediante cédula las resoluciones que contengan el traslado de la demanda, la admisión de un tercero con interés, una medida cautelar, salvo en los casos en que el destinatario tenga registrada una casilla electrónica para dichos fines.

13.4 En las notificaciones electrónicas, los plazos de impugnación se empiezan a contar a los dos días hábiles siguientes de la notificación a la casilla electrónica.

13.5 En las notificaciones por cédula o las realizadas en audiencia, los plazos de impugnación se empiezan a contar a partir del día hábil siguiente a su realización.

13.6 En las zonas de pobreza decretadas por los órganos de gobierno del Poder Judicial, así como en los procesos cuya cuantía no supere las setenta (70) Unidades de Referencia Procesal (URP) las resoluciones son notificadas por cédula, salvo que se haya consignado casilla electrónica. Las notificaciones por cédula fuera del distrito judicial son realizadas directamente a la sede judicial de destino.

13.7 Las resoluciones dictadas en audiencia se entienden notificadas a las partes, en el acto.

SUBCAPÍTULO III
COSTAS Y COSTOS

Artículo 14. Costas y costos

14.1 La condena en costas y costos se regula conforme a la norma procesal civil. El juez exonera al prestador de servicios de costas y costos si las pretensiones reclamadas no superan las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP), salvo que la parte hubiese

obrado con temeridad o mala fe. También hay exoneración si, en cualquier tipo de pretensión, el juez determina que hubo motivos razonables para demandar.

14.2 En los procesos laborales el Estado puede ser condenado al pago de las costas y costos de la parte vencedora.

Subcapítulo IV

MULTAS

Artículo 15. Multas

15.1 En los casos de temeridad o mala fe procesal el juez tiene el deber de imponer a las partes, sus representantes y los abogados una multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

15.2 La multa por temeridad o mala fe es independiente de aquella otra que se pueda imponer por infracción a las reglas de conducta a ser observadas en las audiencias.

15.3 La multa por infracción a las reglas de conducta en las audiencias es no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP).

15.4 Adicionalmente a las multas impuestas, el juez debe emitir copias de las actuaciones respectivas a la presidencia de la corte superior, al Ministerio Público y al Colegio de Abogados correspondiente, para las sanciones a que pudiera haber lugar.

15.5 Existe responsabilidad solidaria entre las partes, sus representantes y sus abogados por las multas impuestas a cualquiera de ellos. No se extiende la responsabilidad solidaria al prestador de servicios.

15.6 El juez sólo puede exonerar de la multa por temeridad o mala fe si el proceso concluye por conciliación judicial antes de la sentencia de segunda instancia, en resolución motivada.

15.7 El juez puede imponer multa a los testigos o peritos, no menor de media (1/2) ni mayor de cinco (5) Unidades de Referencia Procesal (URP) cuando éstos, habiendo sido notificados excepcionalmente por el juzgado, inasisten sin justificación a la audiencia ordenada de oficio por el juez.

Subcapítulo V

Admisión y procedencia

Artículo 16. Requisitos de la demanda

16.1 La demanda se presenta por escrito y debe contener los siguientes requisitos:

1. La designación del juez ante quien se interpone.
2. El nombre, datos de identidad, dirección domiciliaria, domicilio procesal del demandante, constituido por la casilla y correo electrónico del demandante y de la defensa técnica. Si el demandante no puede comparecer o no comparece por sí mismo, deberá indicarse el nombre y dirección domiciliaria de su representante o apoderado.
3. El nombre y dirección domiciliaria del demandado donde será notificada la demanda.
4. El petitorio, que comprende la determinación clara y concreta de lo que se pide. En los casos en que se pide el pago de una suma de dinero debe indicarse el monto total y el monto de cada uno de los extremos que lo integren.
5. Los hechos en que se funde el petitorio. Además, deberá indicarse la situación laboral del demandante, con indicación del tiempo de servicios, función o cargos desempeñados y la última remuneración percibida.
6. La fundamentación jurídica del petitorio.
7. El ofrecimiento de los medios probatorios. No debe incluirse ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.
8. La firma del demandante o de su representante o de su apoderado y la de la defensa técnica. El secretario respectivo certificará la huella digital del demandante cuando este no pudiese firmar.

16.2 Cuando el proceso es iniciado por más de un demandante debe designarse a uno de ellos para que los represente y señalarse un domicilio procesal único.

16.3 Los prestadores de servicios pueden comparecer al proceso sin necesidad de abogado cuando el total reclamado no supere las diez (10) Unidades de Referencia Procesal (URP). Cuando supere este límite y hasta las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP) es facultad del juez, atendiendo a las circunstancias del caso, exigir o no la comparecencia con abogado. En los casos en que se comparezca sin abogado debe emplearse preferentemente el formato de demanda aprobado por el Poder Judicial.

Artículo 17. Admisión de la demanda

17.1 El juez verifica el cumplimiento de los requisitos de la demanda dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes de recibida. Si observa el incumplimiento de alguno de los

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

requisitos, concede al demandante cinco (5) días hábiles para que subsane la omisión o defecto, sin perjuicio de que pueda ejercer su facultad de suplencia o admitir la demanda y disponer que la subsanación se realice en un momento posterior. El juez ordena la conclusión del proceso y el archivo del expediente si el defecto del acto procesal es insubsanable y lesiona un derecho procesal constitucional. La resolución que disponga la conclusión del proceso es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles.

17.2 En toda resolución judicial, el Juez deberá señalar los recursos y sus plazos que el o los justiciables pueden interponer ante el órgano jurisdiccional.

17.3 Excepcionalmente, en el caso de que la improcedencia de la demanda sea notoria, el juez la rechaza de plano en resolución fundamentada. La resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes.

Artículo 18. Requisitos de la contestación a la demanda

18.1 La contestación se presenta por escrito y debe contener los requisitos y anexos establecidos para la demanda en lo que resulte aplicable, sin incluir ningún pliego dirigido a la contraparte, los testigos o los peritos; sin embargo, debe indicarse la finalidad de cada medio de prueba.

18.2 La contestación debe contener también los poderes suficientes para conciliar de los representantes o apoderados que vayan a concurrir a las audiencias.

18.3 La contestación contiene todas las defensas procesales y de fondo que el demandado estime convenientes. Si el demandado no niega expresamente los hechos expuestos en la demanda, estos son considerados admitidos.

18.4 Si el Juez observa el incumplimiento de alguno de los requisitos, le requiere a la demandada para que subsane la omisión o defecto, en el plazo de cinco (05) días hábiles.

18.5 La reconvención es improcedente.

Artículo 19. Caso especial de procedencia

19.1 No es exigible el agotamiento de la vía administrativa en los siguientes casos:

1. Cuando se trate de impugnación de sanciones disciplinarias distintas a la destitución o el despido impuestos a trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, de trabajadores sujetos al régimen laboral público o de carreras especiales al servicio del Estado.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

1. Cuando se trate de pretensiones referidas al contenido esencial del derecho fundamental a la pensión.
2. Cuando se trate de pretensiones referidas al contenido esencial del derecho fundamental a la remuneración.
3. Cuando se trate de actos materiales que lesionen el derecho fundamental al trabajo en su modalidad de permanencia en el puesto de trabajo.

19.2 En los casos que la ley expresamente haya establecido un procedimiento previo ante un órgano o tribunal administrativo deberá recurrirse a ellos antes de acudir al procedimiento contencioso administrativo.

Subcapítulo VI

Actividad probatoria

Artículo 20. Oportunidad

20.1 Los medios probatorios deben ser ofrecidos por las partes únicamente en la demanda y en la contestación. Extraordinariamente, pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, siempre y cuando estén referidos a hechos nuevos o hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. En apelación de sentencia o encontrándose la causa en segunda instancia es posible ofrecer medios de prueba referidos a hechos nuevos o que hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad si ello contradice uno de los fundamentos de hecho que sustentan la sentencia apelada.

20.2 Las partes concurren a la audiencia en la que se actúan las pruebas con todos sus testigos, peritos y documentos que, en dicho momento, corresponda ofrecer, exhibir o se pretenda hacer valer con relación a las cuestiones probatorias. Esta actividad de las partes se desarrolla bajo su responsabilidad y costo, sin necesidad de citación del juzgado y sin perjuicio de que el juez los admita o rechace en el momento. La inasistencia de los testigos o peritos, así como la falta de presentación de documentos, no impide al juez pronunciar sentencia si, sobre la base de la prueba actuada, los hechos necesitados de prueba quedan acreditados.

20.3 Si el testigo ofrecido es trabajador del empleador con vínculo vigente, el demandante podrá solicitar que se le notifique para su concurrencia y se requiera a la demandada para que contribuya a su concurrencia a la audiencia, bajo apercibimiento de tenerse en cuenta su conducta procesal.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

20.4 Si las partes ofrecen la exhibición de pruebas que se encuentra en poder de terceros o de informes que deben emitir terceros, deberán acreditar haber realizado las gestiones pertinentes al logro de dicha información, pese a lo cual no pudieron obtenerlos, a fin de que el Juzgador formule dicho requerimiento en el auto admisorio de la demanda.
20.5 En ningún caso, fuera de las oportunidades señaladas, la presentación extemporánea de medios probatorios acarrea la nulidad de la sentencia apelada. Estos medios probatorios no pueden servir de fundamento de la sentencia.

Artículo 21. Prueba de oficio

21.1 Excepcionalmente, el juez o el colegiado de mérito pueden ordenar la práctica de alguna prueba adicional, en cuyo caso disponen lo conveniente para su realización, procediendo a suspender la audiencia en la que se actúan las pruebas por un lapso adecuado no mayor a treinta (30) días hábiles, y a citar, en el mismo acto, fecha y hora para su continuación.
21.2 Esta facultad no puede ser invocada encontrándose el proceso en casación, ni constituye causal casatoria el no haber ordenado la actuación de pruebas de oficio.

Artículo 22. Carga de la prueba

22.1 La carga de la prueba corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos, y está sujeta a las reglas especiales de distribución de la carga probatoria, sin perjuicio de que por ley se dispongan otras adicionales.
22.2 Acreditada la prestación personal de servicios, se presume la existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo prueba en contrario.
22.3 Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad de trabajador o ex trabajador, tiene la carga de la prueba de:

1. La existencia de la fuente normativa de los derechos alegados de origen distinto al constitucional o legal.
4. El motivo de nulidad invocado y el acto de hostilidad padecido.
5. La existencia del daño alegado.

22.4 De modo paralelo, cuando corresponda, incumbe al demandado que sea señalado como empleador la carga de la prueba de:

1. El pago, el cumplimiento de las normas legales, el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, su extinción o inexigibilidad. El transcurso del tiempo no enerva la obligación del empleador a acreditar el cumplimiento del pago y de sus obligaciones en general.
6. La existencia de un motivo razonable distinto al hecho lesivo alegado.
7. El estado del vínculo laboral y la causa del despido.

22.5 En aquellos casos en que de la demanda y de la prueba actuada aparezcan indicios que permitan presumir la existencia del hecho lesivo alegado, el juez debe considerarlo, por cierto, salvo que el demandado haya aportado elementos suficientes para demostrar que existe justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

22.6 Los indicios pueden ser, entre otros, las circunstancias en las que sucedieron los hechos materia de la controversia y los antecedentes de la conducta de ambas partes.

22.7 Los hechos no controvertidos en la contestación de la demanda se tienen por ciertos.

Artículo 23. Forma de los interrogatorios

El interrogatorio de las partes, testigos y peritos se realizará con sujeción a las siguientes reglas:

1. El interrogatorio es realizado por el juez de manera libre, concreta y clara, sin seguir ningún ritualismo o fórmula preconstituida.
8. Para los interrogatorios no se requiere la presentación de pliegos de preguntas. No se permite leer las respuestas, pero sí consultar documentos de apoyo.
9. Los abogados podrán preguntar o solicitar aclaraciones, bajo las mismas reglas de apertura y libertad que el juez; sin embargo, las preguntas que resulten impertinentes, repetitivas, oscuras, capciosas y las que contengan respuestas sugeridas están sujetas a objeción por el abogado de la parte contraria, pudiendo ser declaradas inadmisibles por el juez en decisión inimpugnable.
10. El juez guía la actuación probatoria con vista a los principios de oralidad, inmediación, concentración, celeridad y economía procesal.
11. El juez sanciona en forma inmediata las conductas temerarias, dilatorias, obstructivas o contrarias al deber de veracidad.

Artículo 24. Declaración de parte

24.1 La parte demandante puede declarar personalmente o por su representante o apoderado. El juez puede requerir que la declaración del demandante se preste personalmente.

24.2 Las personas jurídicas prestan su declaración a través de cualquiera de sus representantes, quienes tienen el deber de acudir informados sobre los hechos que motivan el proceso.

Artículo 25. Declaración de testigos

La declaración de testigos se sujeta a las siguientes reglas:

1. Los testigos no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que les corresponda.
12. El secretario del juzgado expide al testigo una constancia de asistencia a fin de acreditar el cumplimiento de su deber ciudadano. Tratándose de un trabajador, dicha constancia sirve para sustentar ante su empleador la inasistencia y el pago de la remuneración por el tiempo de ausencia.

Artículo 26. Exhibición de planillas

La exhibición de planillas se sujeta a las siguientes reglas:

1. La parte demandada está obligada a exhibir las planillas solicitadas, así como todos los documentos a los que está obligada a tener en su calidad de empleador. La falta de exhibición hace presumir la verdad de los hechos de la demanda a los que las exhibiciones iban dirigidos.
13. La exhibición de las planillas manuales se tiene por cumplida con la presentación de las copias legalizadas correspondientes a los períodos necesitados de prueba.
14. La exhibición de las planillas electrónicas es ordenada por el juez al funcionario del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo responsable de brindar tal información. Es improcedente la tacha de la información de las planillas electrónicas remitida por dicho funcionario, sin perjuicio de la responsabilidad penal o funcional que las partes puedan hacer valer en la vía correspondiente.
15. Las partes pueden presentar copias certificadas expedidas por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo de la información contenida en las planillas electrónicas, en lugar de la exhibición electrónica.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

Artículo 27. Exhibición de documentos obligatorios del empleador

El empleador está en la obligación de exhibir las planillas, boletas de pago, registros de asistencia y demás documentación laboral que está legalmente obligado a generar en su condición de empleador, cuando sean solicitados en el proceso. La falta de exhibición hace presumir la verdad de los hechos alegados por el demandante respecto a los puntos que se pretendían probar con las exhibiciones solicitadas.

Artículo 28. Pericia

El examen de los peritos se sujetará a las reglas siguientes:

1. Los peritos de parte no presencian el desarrollo de la audiencia y solo ingresan a ella en el momento que corresponda efectuar su exposición.
16. El examen de los peritos inicia su identificación y luego su informe respectivo.

    A continuación, el juez les pedirá expliquen las operaciones periciales que han realizado y que expongan el contenido y conclusiones del informe pericial.
17. Luego, el juez dará la palabra a la defensa técnica de las partes empezando por la parte que ofreció la prueba. El juez puede preguntar al perito en cualquier momento.
18. Los informes contables practicados por los peritos adscritos a los juzgados de trabajo y juzgados de paz letrados tienen la finalidad de facilitar al órgano jurisdiccional la información necesaria para calcular, en la sentencia, o en ejecución de sentencia, los montos de los derechos que ampara, por lo que esta pericia no se ofrece ni se actúa como medio probatorio.

Artículo 29. Presunciones legales derivadas de la conducta de las partes

29.1 El juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo a su conducta asumida en el proceso. Esto es particularmente relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes.

29.2 Entre otras circunstancias, se entiende que se obstaculiza la actuación probatoria cuando no se cumple con las exhibiciones ordenadas, se niega la existencia de documentación propia de su actividad jurídica o económica, se impide o niega el acceso al juez, los peritos o los comisionados judiciales al material probatorio o a los lugares donde se encuentre, se niega a declarar, o responde evasivamente.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

Subcapítulo VII

Formas especiales de conclusión del proceso

Artículo 30. Formas especiales de conclusión del proceso

30.1 El proceso laboral puede concluir, de forma especial, por conciliación, allanamiento, reconocimiento de la demanda, transacción o desistimiento. También concluye cuando ambas partes inasisten por segunda vez a cualquiera de las audiencias programadas en primera instancia.

30.2 La conciliación y la transacción pueden ocurrir dentro del proceso, cualquiera sea el estado en que se encuentre, hasta antes de la notificación de la sentencia con calidad de cosa juzgada. El juez puede en cualquier momento invitar a las partes a llegar a un acuerdo conciliatorio, sin que su participación implique prejuzgamiento y sin que lo manifestado por las partes se considere declaración. Si ambas partes concurren al juzgado llevando un acuerdo para poner fin al proceso, el juez le da trámite preferente en el día.

30.3 Para que un acuerdo conciliatorio o transaccional ponga fin al proceso debe superar el test de disponibilidad de derechos, para lo cual se toman los siguientes criterios:

1. El acuerdo debe versar sobre derechos nacidos de una norma dispositiva, debiendo el juez verificar que no afecte derechos indisponibles;
19. Debe ser adoptado por el titular del derecho; y
20. Debe haber participado el abogado del prestador de servicios demandante.

19

30.4 Los acuerdos conciliatorios y transaccionales también pueden darse independientemente de que exista un proceso en trámite, en cuyo caso no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución.

Subcapítulo VIII

Sentencia

Artículo 31. Contenido de la sentencia

31.1 El juez expone en forma resumida los fundamentos de hecho y de derecho expresados por las partes para motivar su decisión. La existencia de hechos admitidos no enerva la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho.

31.2 La sentencia se pronuncia sobre todas las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda, en caso de que la declare fundada total o parcialmente, indicando los derechos reconocidos, así como las prestaciones que debe cumplir el demandado. Si la prestación ordenada es de dar una suma de dinero, la misma

debe estar indicada en monto líquido o liquidable en ejecución de sentencia. El juez dispondrá el pago de sumas mayores a las demandadas si apareciere error en el cálculo de los derechos demandados o error en la invocación de las normas aplicables. Tratándose de pretensiones con pluralidad de demandantes o demandados, el juez debe pronunciarse expresamente por los derechos y obligaciones concretos que corresponda a cada uno de ellos, sin perjuicio de que la liquidación individual se practique en ejecución de sentencia.

31.3 El pago de los intereses legales y la condena en costos y costas no requieren ser demandados. Al liquidarse los intereses legales, en ejecución de sentencia, a la tasa del interés legal moratorio se aplicará un factor multiplicador según la antigüedad de los adeudos considerados desde la fecha de exigibilidad de la obligación, del siguiendo modo: factor adicional de uno (1) para periodos de seis a doce meses; factor adicional de dos (2) para periodos de uno (1) a dos (2) años; y factor adicional de tres (3) para periodos con antigüedad mayor a dos (2) años.

31.4 En los procesos donde participen adolescentes o personas con discapacidad, el órgano jurisdiccional está en la obligación de expedir, conjuntamente con la sentencia, una carta de lectura fácil dirigida al adolescente o persona con discapacidad que, en términos sencillos resuma lo resuelto por el órgano jurisdiccional, bajo responsabilidad funcional.

Subcapítulo IX

Medios Impugnatorios

Artículo 32. Recurso de apelación

32.1 El plazo de apelación de la sentencia es de cinco (5) días hábiles.

32.2 El mismo plazo rige para la apelación de autos.

Artículo 33. Trámite del recurso de apelación

33.1 Interpuesta la apelación y concedida la misma, el órgano jurisdiccional remite el expediente a segunda instancia dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

33.2 El órgano jurisdiccional de segunda instancia realiza las siguientes actividades:

1. Dentro de los cinco (5) días hábiles de recibido el expediente fija día y hora para la celebración de la audiencia de vista de la causa. La audiencia de vista de la causa debe fijarse entre los veinte (20) y treinta (30) días hábiles siguientes de recibido el expediente.

21. Si la demandada apelante no concurre injustificadamente a la audiencia, se declarará el desistimiento del recurso de apelación. No será aplicable el desistimiento si no concurre el prestador de servicios, cuando éste interpone el recurso de apelación. Si ambas partes son apelantes, basta la concurrencia de una de las partes para que se desarrolle la vista de la causa.
22. El día de la audiencia de vista, concede el uso de la palabra al abogado de la parte apelante a fin de que exponga sintéticamente los extremos apelados y los fundamentos en que se sustentan; a continuación, cede el uso de la palabra al abogado de la parte contraria. Puede formular preguntas a las partes y sus abogados a lo largo de las exposiciones orales.
23. Concluida la exposición oral, luego del debate dicta el fallo y las razones que lo sustentan, de modo sucinto. Excepcionalmente, puede diferir su sentencia dentro de los diez (10) días hábiles siguientes. En ambos casos, al finalizar la audiencia señala día y hora para la notificación de la sentencia, bajo responsabilidad. La citación debe realizarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de celebrada la audiencia de vista.

Artículo 34. Recurso de casación

34.1 El recurso de casación procede contra los autos que ponen fin al proceso y las sentencias definitivas dictadas en segunda instancia por las salas laborales superiores.

34.2 No procede el recurso de casación:

1. Contra las resoluciones que conceden medidas cautelares.
24. Contra las resoluciones que ordenan llevar adelante la ejecución.
25. Contra las resoluciones cuyo pronunciamiento sea anulatorio y ordene a la instancia inferior emitir una nueva resolución.
26. Contra las resoluciones no impugnables mediante el recurso de casación.

Artículo 35. Causales de casación

35.1 Es causal del recurso de casación la infracción normativa que incida directamente sobre la decisión contenida en la resolución impugnada. Los errores que no inciden en la parte resolutiva de la sentencia no se tienen en cuenta.

35.2 La infracción normativa puede consistir en:

1. La inobservancia de las garantías esenciales del debido proceso, siempre que la parte no haya convalidado la nulidad incurrida de ser el caso.
27. La inobservancia de las garantías materiales, constitucionales o legales, derivada de una errónea interpretación o aplicación de las normas ya sean están de derecho nacional o de derecho internacional, según lo señalado en el título preliminar.
28. El apartamiento no justificado de las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia de la República.
29. La contradicción con jurisprudencia objetivamente similar de otras salas laborales superiores.

Artículo 36. Interposición y admisión del recurso de casación

36.1 El recurso de casación será admitido siempre y cuando se cumpla con los siguientes requisitos:

1. Se interponga contra alguna de las resoluciones pasibles del recurso de casación.
30. Ante la sala superior que emitió la resolución impugnada.
31. Dentro del plazo de diez (10) días hábiles siguientes de notificada la resolución que se impugna.
32. Adjuntando el recibo de pago del arancel judicial correspondiente

36.2 Si no se cumple con los requisitos señalados, la sala superior declara inadmisible el recurso e impondrá una multa no menor de diez (10) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP) en caso de que considere que su interposición tuvo como causa una conducta maliciosa o temeraria.

36.3 Si no se cumple con el pago del arancel judicial, la sala superior concede al impugnante un plazo de tres (3) días para su subsanación. Vencido el plazo sin que se produzca la subsanación, la sala superior declara inadmisible el recurso. Sin perjuicio de la inadmisibilidad, se sanciona con una multa no menor de diez (10) ni mayor de veinte (20) Unidades de Referencia Procesal (URP) si se advierte una conducta maliciosa o temeraria.

36.4 La sala superior califica la admisibilidad del recurso dentro de un plazo máximo de veinte (20) días hábiles contados desde su interposición.

36.5 Si la sala superior admite el recurso de casación, eleva copia de los principales actuados del expediente a la Corte Suprema de Justicia de la República, en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles. Dentro del mismo plazo, también notifica a las partes en sus respectivas casillas electrónicas con el auto de admisión y el recurso correspondiente.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

Si la sala superior no admite el recurso de casación, declara consentida la sentencia o auto emitido, notifica a las partes, y devuelve los actuados al juez de primera instancia en el día, ordenando la ejecución de lo decidido.

Artículo 37. Improcedencia del recurso de casación

37.1 La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara la improcedencia del recurso de casación cuando no se cumplen los requisitos y causales previstos precedentemente. Asimismo, cuando:

1. Se refiere a resoluciones no impugnables mediante el recurso de casación.
33. El recurrente hubiera consentido la resolución adversa en primera instancia, si esta fuere confirmada por la resolución objeto del recurso.
34. El recurrente invoca violaciones de la ley que no hubieran sido deducidas en los fundamentos de su recurso de apelación, salvo que estén referidas a fundamentos contenidos en la resolución de segunda instancia que no hubieran sido previstos en la de primera.
35. Carezca manifiestamente de fundamento jurídico.
36. Se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales y el recurrente no presenta argumentos suficientes para que se modifique el criterio, precedente o doctrina jurisprudencial ya establecida.
37. La sentencia de segunda instancia confirma la de primera instancia. No obstante, procederá el recurso solo si expresamente, el recurrente denuncia y desarrolla que la recurrida se opone a la doctrina jurisprudencial, o cuando exista jurisprudencia contradictoria de las salas laborales superiores.
38. Cuando el pronunciamiento de segunda instancia sea anulatorio.

37.2 La resolución que se pronuncia sobre la procedencia o improcedencia del recurso de casación se expide dentro del plazo de veinte (20) días hábiles contados desde la recepción de las copias del expediente, para ello se requiere tan solo de tres votos de los jueces supremos. En la resolución que declara procedente el recurso, se señalará día y hora para la realización de la audiencia casatoria que se llevará a cabo dentro de los siguientes veinte (20) días hábiles siguientes de la declaración de procedencia.

37.3 La improcedencia del recurso puede afectar a todas las causales invocadas o referirse solamente a alguna de estas.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

Artículo 38. Trámite en la Corte Suprema de Justicia de la República

38.1 La audiencia de casación se instala con la concurrencia de las partes que asistan, quienes pueden informar sin necesidad de que hubiesen pedido el uso de la palabra. En todo caso, la falta de comparecencia injustificada del abogado de la parte recurrente da lugar a que se declare improcedente el recurso de casación.

38.2 Instalada la audiencia, primero interviene el abogado de la parte recurrente. Si existen varios recurrentes, la sala fija el orden de intervención, luego de lo cual informan los abogados de las partes recurridas.

38.3 Si se nombra o cambia de representante procesal, debe acreditarse tal situación.

38.4 La sentencia casatoria se expide dentro del plazo de diez (10) días hábiles luego de finalizada la audiencia.

38.5 El recurso de casación se resuelve con el voto conforme de cuatro jueces supremos.

Artículo 39. Competencia

39.1 El recurso atribuye a la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República el conocimiento del proceso solo en cuanto a las causales de casación expresamente invocadas por el recurrente.

39.2 La competencia de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República se ejerce sobre los errores jurídicos que contenga la resolución recurrida. Está sujeta de manera absoluta a los hechos legalmente probados y establecidos en la sentencia o auto recurridos.

39.3 Los errores jurídicos de la sentencia recurrida que no influyan en su parte dispositiva no causan nulidad. La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República debe corregirlos en la sentencia casatoria.

Artículo 40. Efecto del recurso de casación

40.1 La interposición del recurso de casación no suspende la ejecución de las sentencias. Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero, a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o carta fianza renovable por el importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e inimpugnable.

40.2 El importe total reconocido del depósito o carta fianza renovable debe de incluir el capital, los intereses del capital a la fecha de interposición del recurso, los costos y costas,

así como los intereses estimados que, por dichos conceptos, se devenguen hasta dentro de un (1) año de interpuesto el recurso. La liquidación del importe total reconocido es efectuada por un perito contable.

40.3 En caso de que el demandante tuviese trabada a su favor una medida cautelar, debe notificársele a fin de que, en el plazo de cinco (5) días hábiles, elija entre conservar la medida cautelar trabada o sustituirla por el depósito o la carta fianza ofrecidos. Si el demandante no señala su elección en el plazo concedido, se entiende que sustituye la medida cautelar por el depósito o la carta fianza. En cualquiera de estos casos, el juez de la demanda dispone la suspensión de la ejecución.

Artículo 41. Consecuencias del recurso de casación

41.1 Si la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara fundado el recurso de casación, sea por infracción de una norma de derecho material o procesal, o por apartamiento inmotivado del precedente judicial o constitucional, la resolución impugnada debe revocarse, íntegra o parcialmente, según corresponda.

41.2 Si la infracción de la norma procesal produjo la afectación del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva o del debido proceso del recurrente, la Corte Suprema casa la resolución impugnada y, además, según corresponda:

1. Ordena a la sala superior que expida nueva resolución.
39. Anula lo actuado hasta la foja que contiene la infracción inclusive o hasta donde alcancen los efectos de la nulidad declarada.
40. Anula la resolución apelada y ordena al juez del primer grado que expida otra.

41.3 En cualquiera de estos supuestos, la sentencia casatoria tiene fuerza vinculante para el órgano jurisdiccional respectivo.

41.4 El texto íntegro de todas las sentencias casatorias, incluso los precedentes judiciales, se publican obligatoriamente en el diario oficial El Peruano y en la página web del Poder Judicial.

Artículo 42. Precedente vinculante de la Corte Suprema de Justicia de la República

42.1 La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República que conozca del recurso de casación por decisión unánime de sus integrantes podrá emitir una sentencia que constituya o varíe una doctrina jurisprudencial.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

42.2 La decisión que se tome constituye doctrina jurisprudencial y vincula a los órganos jurisdiccionales de la República, hasta que sea modificada por otra.

42.3 Esta doctrina jurisprudencial debe ser invocada por los órganos jurisdiccionales de todas las instancias, como precedente de obligatorio cumplimiento. En caso que por excepción decidan apartarse de dicho criterio, están obligados a motivar adecuadamente su resolución dejando constancia de la doctrina jurisprudencial que desestiman y de los fundamentos que invocan.

42.4 Los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la República pueden excepcionalmente apartarse en sus resoluciones jurisdiccionales, de su propio criterio jurisprudencial, motivando debidamente su resolución, lo que debe hacer conocer mediante nuevas publicaciones, también en el Diario Oficial "El Peruano", en cuyo caso debe hacer mención expresa del precedente que deja de ser obligatorio por el nuevo y de los fundamentos que invocan.

Artículo 43. Publicación de sentencias

El texto íntegro de todas las sentencias casatorias y las resoluciones que declaran improcedente el recurso de casación se publican obligatoriamente en el diario oficial El Peruano y en el portal institucional del Poder Judicial, aunque no establezcan precedente. La publicación se hace dentro de los sesenta (60) días de expedidas, bajo responsabilidad.

Artículo 44. Represión de actos lesivos homogéneos en los procesos laborales

44.1 Si sobreviniene un acto sustancialmente homogéneo al declarado lesivo en el proceso, podrá ser denunciado por la parte demandante en la etapa de ejecución de la sentencia ejecutoriada. En caso de que se produzca un nuevo acto lesivo tras el archivo definitivo del expediente principal, este podrá ser tramitado mediante la presentación de un incidente en cuaderno separado.

44.2 Presentada la solicitud de represión, el juez resolverá previo traslado a la otra parte por un plazo de tres días, con o sin la absolución de esta. La resolución es apelable sin efecto suspensivo.

44.3 La decisión que declara la homogeneidad amplía el ámbito de protección del proceso, incorporando y ordenando la represión del acto lesivo sobreviniente. En caso de no declararse la homogeneidad, el juez dejará a salvo el derecho del demandante para que el nuevo acto lesivo pueda ser evaluado en un nuevo proceso laboral.

TÍTULO II
PROCESOS LABORALES
CAPÍTULO I
PROCESO ÚNICO LABORAL

Artículo 45. Admisión de la demanda

45.1 Verificados los requisitos de la demanda, el juez emite resolución disponiendo la admisión de la demanda y el emplazamiento al demandado para que la conteste en el plazo de diez (10) días hábiles.

45.2 Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de vencido el plazo para la contestación, el juez verifica el cumplimiento de sus requisitos y emite resolución conteniendo lo siguiente:

1. La admisión directa de la contestación o con observaciones, en cuyo caso señala los actos que deben ser subsanados y el plazo, bajo apercibimiento de considerársele rebelde en caso de no cumplir con ello;
41. Pone en conocimiento del demandante el escrito de demanda y sus anexos; y,
42. Cita a las partes a audiencia única señalando día y hora.

45.3 Si de la demanda o contestación se advierte la necesidad de gestionar la remisión por terceros de información vinculada a la controversia que no haya podido ser obtenida directamente por las partes a pesar de sus esfuerzos, dictará los requerimientos o mandatos pertinentes y necesarios para el envío de lo solicitado, asumiendo la parte solicitante la responsabilidad de su gestión.

Artículo 46. Audiencia única

La audiencia única comprende y concentra las etapas de conciliación, confrontación de posiciones, actuación probatoria, alegatos y sentencia, las cuales se realizan, en dicho orden, una seguida de la otra, del siguiente modo:

1. La audiencia inicia con la acreditación de las partes o apoderados y sus abogados. Si el demandante no asiste, la audiencia puede desarrollarse únicamente con el demandado.
43. El demandado incurre en rebeldía automática sin necesidad de declaración expresa si no asiste a la audiencia aun cuando haya presentado su escrito de contestación en el plazo conferido; o si asistiendo a la audiencia no hubiese contestado la demanda en el plazo; o si habiéndola contestado esta fuese admitida o el

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

representante o apoderado que concurre no tiene poderes suficientes para conciliar. En cualquiera de estos casos, la rebeldía automática presume la verdad de los hechos expuestos en la demanda, con base en los cuales el órgano jurisdiccional dictará sentencia, pasando a las etapas de alegatos y sentencia. Si el juez motiva que los hechos expuestos en la demanda infringen las máximas de la experiencia, prosigue a la etapa de conciliación.

44. Si ambas partes insisten, el juez declarará la conclusión del proceso si, dentro de los treinta (30) días naturales siguientes, ninguna de las partes hubiese solicitado fecha para nueva audiencia. Si en la nueva fecha tampoco concurren el Juez dará por concluido el proceso.
45. El juez invita a las partes a conciliar sus posiciones y participa activamente a fin de que solucionen sus diferencias, total o parcialmente, a cuyo efecto podrá utilizar cualquier estrategia, método o herramienta. El Juez podrá proponer una fórmula de conciliación, sin que ello signifique adelanto de opinión.
46. Por decisión de las partes la conciliación puede prolongarse lo necesario hasta que se dé por agotada, pudiendo incluso continuar los días hábiles siguientes, cuantas veces sea necesario, en un lapso no mayor de veinte (20) días hábiles. Si las partes acuerdan la solución parcial o total de su conflicto el juez, en el acto, aprueba lo acordado con efecto de cosa juzgada; asimismo, ordena el cumplimiento de las prestaciones acordadas en el plazo establecido por las partes o, en su defecto, en el plazo de cinco (5) días hábiles siguientes. Del mismo modo, si algún extremo no es controvertido, el juez emite resolución con calidad de cosa juzgada ordenando su pago en igual plazo.

47. En caso de haberse solucionado parcialmente el conflicto, o no haberse solucionado, el juez precisa las pretensiones que son materia de juicio. El demandante podrá actualizar sus pretensiones en éste etapa, a cuyo efecto deberá expresarlo oralmente y de ser el caso adjuntar el nuevo texto de la demanda, del cual se correrá traslado a la demandada por el plazo de cinco (5) días hábiles para su absolución escrita y se suspenderá la audiencia, fijándose nueva fecha la continuación de la misma. Presentada la contestación ampliada se pondrá en conocimiento del demandante.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

Artículo 47. Etapa de confrontación de posiciones

47.1 La etapa de confrontación de posiciones se inicia con una breve exposición oral de las pretensiones demandadas y de los fundamentos de hecho que las sustentan.

47.2 Luego, el demandado hace una breve exposición oral de los hechos que, por razones procesales o de fondo, contradicen la demanda.

Artículo 48. Etapa de actuación probatoria

La etapa de actuación probatoria se lleva a cabo del siguiente modo:

1. El Juez enuncia los hechos que no necesitan de actuación probatoria por tratarse de hechos admitidos, presumidos por ley, recogidos en resolución judicial con calidad de cosa juzgada o notorios; así como los medios probatorios dejados de lado por estar dirigidos a la acreditación de tales hechos o de hechos impertinentes o irrelevantes para la causa.
48. A continuación, el juez enuncia las pruebas admitidas respecto de los hechos necesitados de actuación probatoria.
49. Inmediatamente después, las partes pueden proponer cuestiones probatorias solo respecto de las pruebas admitidas. El juez dispone la admisión de las cuestiones probatorias únicamente si las pruebas que las sustentan pueden ser actuadas en esta etapa. El Juez rechazará las cuestiones probatorias que no reúnan los requisitos o presupuestos de admisibilidad o procedencia.
50. El juez toma juramento o promesa a las partes, testigos y peritos que participen en esta etapa.
51. Se actúan todos los medios probatorios admitidos, incluidos los vinculados a las excepciones y cuestiones probatorias, empezando por los ofrecidos por el demandante, en el orden siguiente: declaración de parte, testigos, pericia, reconocimiento y exhibición de documentos. Si agotada la actuación de estos medios probatorios fuese imprescindible la inspección judicial, el juez suspende la audiencia y señala día, hora y lugar para su realización citando, en el momento, a las partes, testigos o peritos que corresponda. La inspección judicial puede ser grabada en audio y vídeo o recogida en acta con anotación de las observaciones constatadas; al concluirse, señala día y hora, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes para los alegatos y sentencia.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

52. La actuación probatoria debe concluir en el día programado; sin embargo, si la actuación no se hubiese agotado, la audiencia continúa dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.

Artículo 49. Alegatos y sentencia

Finalizada la actuación probatoria, los abogados presentan oralmente sus alegatos. Concluidos los alegatos, el juez señala día y hora, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, para la notificación de la sentencia. Excepcionalmente, por la complejidad del caso, puede diferir el fallo de su sentencia dentro de los diez (10) días hábiles posteriores.

CAPÍTULO II
PROCESO DE FUERO SINDICAL

Artículo 50. Supuestos de aplicación

El proceso de fuero sindical tiene por objeto garantizar la protección especial que la ley otorga a los trabajadores amparados por el fuero sindical. Se tramita conforme a las reglas del proceso único laboral, con las particularidades establecidas en este capítulo.

Artículo 51. Demanda del empleador

51.1 El empleador que pretenda despedir, trasladar a otro establecimiento de la misma empresa o a un lugar distinto, o modificar las condiciones de trabajo de un trabajador amparado por fuero sindical, debe solicitar previamente autorización judicial, expresando la causa justa invocada.

51.2 La demanda debe cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y contener la fundamentación precisa de la causa justa invocada. Asimismo, debe acompañarse la documentación pertinente que acredite la condición de dirigente sindical del trabajador afectado.

51.3 Queda prohibido al empleador despedir, trasladar o modificar las condiciones de trabajo de un trabajador amparado por fuero sindical sin contar con la autorización judicial previa.

Artículo 52. Demanda del trabajador

52.1 El trabajador amparado por fuero sindical que hubiese sido despedido, trasladado o que hubiere sufrido desmejora en sus condiciones de trabajo sin autorización judicial

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

previa, puede demandar la tutela del fuero sindical solicitando su reposición, el retorno a su lugar habitual de trabajo o la restitución de sus condiciones laborales originales, según corresponda.

52.2 El fuero sindical se acredita con cualquiera de los siguientes documentos:

1. Copia del certificado de inscripción de la junta directiva en el Registro de Organizaciones Sindicales.
53. Copia de la comunicación dirigida al empleador informando la condición de dirigente sindical.
54. Cualquier otro documento que acredite la condición de dirigente sindical.

Artículo 53. Participación de la organización sindical

53.1 La organización sindical a la que pertenece el trabajador amparado por fuero sindical debe ser notificada con el auto admisorio de la demanda, ya sea interpuesta por el empleador o por el trabajador, a fin de que pueda participar en el proceso de estimarlo pertinente. La falta de participación de la organización sindical no afecta el desarrollo del proceso.

53.2 La organización sindical puede intervenir en el proceso a través de su representante legal en cualquiera de las siguientes formas:

1. Interponiendo la demanda en representación del trabajador.
55. Coadyuvando al trabajador aforado en el proceso.

Artículo 54. Trámite preferente

54.1 Los procesos de fuero sindical tienen trámite preferente sobre cualquier otro, con excepción de los procesos con intervención de madres gestantes o lactantes, menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad.

54.2 Admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella por un término de cinco (5) días hábiles para que sea contestada por escrito.

54.3 Vencido el término para contestar, el juez señalará fecha y hora para la audiencia única, la cual deberá celebrarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes.

Artículo 55. Contenido de la sentencia

55.1 Cuando se trate de la acción del empleador, el juez concederá la autorización para despedir, trasladar o modificar las condiciones laborales del trabajador si encuentra probada la existencia de una causa justa; de lo contrario, la denegará.

55.2 En caso de la acción del trabajador, si el juez comprueba que fue despedido, trasladado o modificadas sus condiciones de trabajo sin autorización judicial previa, ordenará:

1. Su reintegro al centro de trabajo y al cargo que venía desempeñando.
56. El pago de las remuneraciones dejadas de percibir desde la fecha del despido hasta su efectiva reposición, sin solución de continuidad para efectos pensionarios y de antigüedad.
57. La restitución de las condiciones de trabajo originales, cuando corresponda.
58. El pago de las indemnizaciones que correspondan por los daños causados.

55.3 El juez puede ordenar el pago de una multa de una (1) a cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP) al empleador que haya desconocido el fuero sindical.

Artículo 56. Plazo para accionar

56.1 El plazo para que el trabajador interponga la demanda de tutela de fuero sindical es de treinta (30) días hábiles, contados desde la fecha del despido, traslado o modificación de las condiciones de trabajo.

56.2 Para el empleador, el plazo para solicitar la autorización judicial es de treinta (30) días hábiles contados desde la fecha en que tuvo conocimiento del hecho que invoca como causa justa.

CAPÍTULO III
PROCESOS COLECTIVOS

Artículo 57.- Supuesto de aplicación

El proceso colectivo es aplicable para la tutela de:

1. Derechos difusos, entendidos como aquellos supraindividuales e indivisibles pertenecientes a un grupo, categoría o clase de personas indeterminables, vinculadas por circunstancias de hecho.
59. Derechos colectivos en sentido estricto, entendidos como aquellos supraindividuales e indivisibles pertenecientes a un grupo, categoría o clase de

personas determinadas o determinables, vinculadas entre sí o con la parte contraria por una relación jurídica.

60. Derechos individuales homogéneos, entendidos como aquellos derechos subjetivos individuales y divisibles, pertenecientes a los miembros de un grupo, categoría o clase, que provienen de un origen común.

Artículo 58.- Pretensiones colectivas

58.1 Los procesos colectivos pueden comprender pretensiones declarativas, constitutivas o de condena, referidas a la cesación del acto lesivo, la eliminación de sus efectos, la implementación de medidas correctivas, el resarcimiento del daño, u otras que busquen la protección del derecho afectado.

58.2 En los procesos colectivos referidos a derechos difusos o colectivos en sentido estricto, la pretensión debe orientarse a la tutela del derecho colectivo como tal. Tratándose de derechos individuales homogéneos, la pretensión se orienta tanto a la declaración del hecho lesivo común como a la restitución o reparación, según sea el caso, de los derechos individuales de los afectados, lo cual será determinado y/o liquidado en ejecución de sentencia.

Artículo 59.- Legitimación

59.1 Conforme a lo dispuesto en el artículo 9 de la presente ley, cuando se trate de derechos colectivos difusos o de derechos colectivos en sentido estricto, sin perjuicio de la demanda que pudiese interponer el propio afectado, la demanda colectiva podrá ser interpuesta por el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo, una organización sindical o una asociación o institución sin fines de lucro dedicada a la protección de derechos fundamentales con solvencia para afrontar la defensa a criterio del juez.

59.2 De igual modo, conforme al artículo 9 de la presente ley, cuando se afecten los derechos de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, a la seguridad y salud en el trabajo y, en general, cuando se afecte un derecho que corresponda a un grupo o categoría de prestadores de servicios, pueden ser demandantes el sindicato, los representantes de los trabajadores, o cualquier trabajador o prestador de servicios del ámbito.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

Artículo 60.- Trámite

El proceso colectivo se tramita conforme a las reglas del proceso único laboral, con las particularidades previstas en el presente capítulo.

Artículo 61.- Sentencia

La sentencia que acoge la pretensión en un proceso colectivo debe:

1. Definir con la mayor precisión posible el grupo, categoría o clase de afectados a los que se extienden sus efectos;
61. Especificar las obligaciones de hacer o no hacer que correspondan y su alcance;
62. Establecer, de corresponder, los criterios para la posterior liquidación de los derechos individuales; y
63. Disponer los mecanismos para la ejecución, supervisión y seguimiento del cumplimiento de lo ordenado.

Artículo 62.- Cosa juzgada en procesos colectivos

62.1 En los procesos colectivos la sentencia que declara fundada la demanda tiene efectos erga omnes, beneficiando a todos los integrantes del grupo, categoría o clase definidos en la sentencia, estén o no identificados individualmente. En el caso de los procesos colectivos de derechos individuales homogéneos, la identificación individual de los beneficiarios se realiza en ejecución de sentencia.

62.2 En los procesos colectivos de derechos individuales homogéneos la sentencia que declara infundada la demanda solo produce los efectos de la cosa juzgada para quienes interpusieron la demanda.

CAPITULO IV
PROCESO DE CALIFICACIÓN DE LA ILEGALIDAD DE LA HUELGA

Artículo 63. Legitimación y procedencia

63.1 En los casos establecidos en la ley de la materia, la parte empleadora podrá demandar la declaración de ilegalidad de la huelga.

63.2 La demanda debe cumplir con los requisitos establecidos en la presente ley, debiendo acompañarse los medios probatorios que acrediten los supuestos de ilegalidad invocados conforme a la legislación sustantiva.

63.3 La interposición de la demanda de calificación no suspende la huelga.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

Artículo 64. Trámite especial

64.1 Recibida la demanda, el juzgado especializado de trabajo verifica el cumplimiento de los requisitos procesales y, de ser admitida, corre traslado inmediato a la organización sindical u órgano que representa a los trabajadores en huelga, para que absuelva en el plazo improrrogable de dos (2) días hábiles.

64.2 Con o sin la contestación de la demanda, el juez resuelve dentro de los dos (2) días hábiles siguientes, pudiendo convocar a las partes a una audiencia única si lo considera necesario para mejor resolver.

64.3 La resolución que declara la ilegalidad o legalidad de la huelga debe estar debidamente motivada, con expresa referencia a los hechos probados y las normas que sustentan la decisión.

Artículo 65. Medios impugnatorios

65.1 Contra la resolución que declara la ilegalidad o legalidad de la huelga procede recurso de apelación, el cual debe interponerse dentro del plazo de dos (2) días hábiles siguientes a su notificación.

65.2 Concedida la apelación, los actuados se elevan a la sala laboral superior dentro del día hábil siguiente, debiendo el órgano jurisdiccional de segunda instancia resolver en un plazo máximo de dos (2) días hábiles, contados desde la recepción del expediente.

65.3 La sala laboral superior resuelve previo informe oral de las partes, si estas lo solicitan. La audiencia debe programarse dentro del mismo plazo de emisión de la resolución.

65.4 Contra la resolución de segunda instancia no procede el recurso de casación.

Artículo 66. Efectos de la sentencia sobre la huelga

66.1 Declarada la ilegalidad de la huelga mediante resolución consentida o ejecutoriada, los trabajadores deberán reincorporarse al día siguiente al del requerimiento colectivo efectuado por el empleador a los trabajadores, mediante cartelón colocado en lugar visible de la puerta principal del centro de trabajo, bajo constancia notarial, o de Juez de Paz y a falta de éstos, bajo constancia policial.

66.2 La resolución queda consentida a partir del vencimiento del plazo de apelación de la resolución de primera instancia, sin que ésta se haya producido.

66.3 La resolución dictada en segunda y última instancia causa ejecutoria desde el día siguiente a la fecha de su notificación.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

66.4 Declarada la ilegalidad de la huelga por sentencia consentida o ejecutoriada, los días de inasistencia injustificada se empiezan a computar desde el día siguiente al requerimiento colectivo efectuado por el empleador a los trabajadores mediante cartelón colocado conforme a las pautas señaladas en este artículo.

CAPITULO V
PROCESO IMPUGNATIVO DE LAUDOS ARBITRALES ECONÓMICOS

Artículo 67. Admisión de la demanda

67.1 Además de los requisitos de la demanda del proceso único laboral, la sala laboral verifica lo siguiente que se ha interpuesto dentro de los diez (10) días siguientes de haberse notificado el laudo arbitral que haciendo las veces de convenio colectivo resuelve el conflicto económico o de creación de derechos, o su aclaración; y, que se haya acompañado recaudo de haberse cumplido o estarse dando cumplimiento a las prestaciones contenidas en el laudo arbitral impugnado. En caso contrario, declara la improcedencia de la demanda y la conclusión del proceso. Esta resolución es apelable en el plazo de cinco (5) días hábiles.

67.2 Los únicos medios probatorios admisibles en este proceso son los documentos, los cuales deben ser acompañados necesariamente con los escritos de demanda y contestación.

Artículo 68. Efecto de la admisión de la demanda

68.1 La interposición de la demanda impugnativa no impide ni posterga la ejecución del laudo arbitral, salvo medida cautelar dictada por la propia sala laboral.

68.2 Si durante el transcurso del proceso, el empleador deja de cumplir con las prestaciones contenidas en el laudo arbitral impugnado, el sindicato podrá solicitar la suspensión del proceso hasta que se retome el cumplimiento. Si transcurridos tres meses (3) sin que el empleador haya retomado el cumplimiento de las prestaciones del laudo impugnado, el proceso impugnativo concluirá sin pronunciamiento sobre el fondo y sin afectar la validez del laudo impugnado.

Artículo 69. Traslado y contestación

Verificados los requisitos de la demanda, la sala laboral emite resolución disponiendo:

1. La admisión de la demanda;

64. El emplazamiento al demandado para que conteste la demanda en el plazo de diez (10) días hábiles.

Artículo 70. Trámite y sentencia de primera instancia

La sala laboral, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de contestada la demanda, dicta sentencia por el solo mérito de los escritos de demanda, contestación y los documentos acompañados. Para tal efecto señala día y hora, dentro del plazo indicado, citando a las partes para alegatos y sentencia, lo cual se lleva a cabo de igual modo a lo regulado en el proceso único laboral.

Artículo 71. Improcedencia del recurso de casación

Contra la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República no procede el recurso de casación.

CAPITULO VI
PROCESO CAUTELAR

Artículo 72. Aspectos generales

72.1 A pedido de parte, todo juez puede dictar medida cautelar, antes de iniciado un proceso o dentro de este, destinada a garantizar la eficacia de la pretensión principal. Las medidas cautelares se dictan sin conocimiento de la contraparte.

72.2 Cumplidos los requisitos, el juez puede dictar cualquier tipo de medida cautelar, cuidando que sea la más adecuada para garantizar la eficacia de la pretensión principal.

72.3 En consecuencia, son procedentes además de las medidas cautelares reguladas en este capítulo cualquier otra contemplada en la norma procesal civil u otro dispositivo legal, sea esta para futura ejecución forzada, temporal sobre el fondo, de innovar o de no innovar, e incluso una genérica no prevista en las normas procesales.

Artículo 73. Medida especial de reposición provisional

73.1 El juez puede dictar, entre otras medidas cautelares, fuera o dentro del proceso, una medida de reposición provisional, cumplidos los requisitos ordinarios.

73.2 En los procesos de fuero sindical, el juez aplicará las siguientes reglas especiales:

1. La medida de reposición provisional se dictará dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de solicitada, bastando para ello acreditar la condición de sujeto protegido

por el fuero sindical y el hecho del despido, traslado o modificación de las condiciones de trabajo.

65. La medida cautelar se concederá sin exigir contracautela ni peligro en la demora y su apelación se concederá sin efecto suspensivo.

73.3 Las mismas reglas especiales se aplicarán cuando el proceso sea iniciado por madres gestantes o lactantes, menores de edad, personas con discapacidad o personas con enfermedades terminales, quienes acreditarán su condición con la documentación pertinente.

73.4 Si el empleador incumple la medida cautelar de reposición, el juez impondrá una multa no menor de cinco (5) ni mayor de cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP), sin perjuicio de ordenar su efectivo cumplimiento mediante el uso de la fuerza pública y de las responsabilidades penales que correspondan por el desacato a la autoridad.

73.5 Si la sentencia firme declara fundada la demanda, se conservan los efectos de la medida de reposición, considerándose ejecutada la sentencia.

Artículo 74. Asignación provisional

De modo especial, en los procesos en los que se pretende la reposición o el pago de una indemnización por despido, el juez puede disponer la entrega de una asignación provisional mensual no mayor a la última remuneración ordinaria mensual percibida por el trabajador. Si la sentencia es fundada, al producirse la reposición cesa la asignación provisional, y, en caso de ordenarse el pago de remuneraciones devengadas, se deduce la asignación percibida.

CAPÍTULO VII
PROCESO DE EJECUCIÓN

Artículo 75. Títulos ejecutivos

Se tramitan en proceso de ejecución los siguientes títulos ejecutivos:

1. Las resoluciones judiciales firmes;
66. Las actas de conciliación judicial;
67. Los laudos arbitrales que resuelven conflictos jurídicos de naturaleza laboral;
68. Los laudos arbitrales que resuelven conflictos económicos;
69. Las resoluciones firmes de la Autoridad Administrativa de Trabajo que reconozcan derechos u obligaciones laborales;

70. El documento privado que contenga una transacción extrajudicial;
71. El acta de conciliación extrajudicial, privada o administrativa;
72. La liquidación para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones; y,
73. Las resoluciones en materia laboral o previsional emitidas por funcionarios administrativos que reconozcan derechos laborales o pensionarios.

Artículo 76. Competencia para la ejecución de resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial

Las resoluciones judiciales firmes y actas de conciliación judicial se ejecutan exclusivamente ante el juez que conoció la demanda y dentro del mismo expediente. Si la demanda se hubiese iniciado ante una sala laboral, es competente el juez especializado de trabajo de turno.

Artículo 77. Ejecución de laudos arbitrales que resuelven un conflicto jurídico

Los laudos arbitrales que hayan resuelto un conflicto jurídico de naturaleza laboral se ejecutan conforme a la norma general de arbitraje.

Artículo 78. Ejecución de laudos arbitrales que resuelven conflictos económicos

78.1 La ejecución de los laudos arbitrales económicos comprende la parte devengada por el lapso vencido, respecto de los trabajadores a los que les corresponde su aplicación según lo establecido en el ámbito del laudo.

78.2 La liquidación de los derechos reconocidos se practica hasta la fecha de interposición de la demanda. Los períodos que venzan con posterioridad se incorporarán progresivamente y serán materia de liquidación en ejecución de sentencia, conforme al procedimiento establecido en este capítulo.

Artículo 79. Ejecución de resoluciones firmes de la Autoridad Administrativa de Trabajo o de funcionarios administrativos que reconozcan derechos u obligaciones laborales

79.1 Son resoluciones firmes que merecen ejecución aquellas que quedaron consentidas y las dictadas en última instancia administrativa agotando la vía.

79.2 La admisión de la demanda contencioso administrativa no impide la vigencia ni la ejecución del acto o de la resolución administrativa que se ejecuta, salvo que el órgano judicial que conoce la demanda contencioso administrativa haya dictado una medida cautelar que dispongan lo contrario.

79.3 De igual modo, la admisión de la demanda contencioso administrativa contra el acto o resolución que se ejecuta es causal de suspensión del proceso de ejecución, salvo que el órgano judicial de la demanda contencioso administrativa haya dictado medida cautelar en ese sentido.

Artículo 80. Ejecución en los casos de terminación colectiva de los contratos de trabajo y de suspensión perfecta de labores

80.1 En los casos que las resoluciones administrativas que se ejecutan hayan reconocido el pago de las remuneraciones devengadas y la reposición en sus puestos de trabajo a favor de los afectados con las medidas adoptadas por el empleador, al admitirse la demanda se corre traslado al empleador para que en el plazo de tres (3) días hábiles acredite haber cumplido el acto o resolución administrativa.

80.2 En caso que el empleador formule contradicción constituye requisito de procedencia de la misma, acreditar la reposición de los trabajadores y el pago de las remuneraciones devengadas. En caso de incumplimiento, el juzgado declara la improcedencia de la contradicción u ordena seguir con la ejecución. Esta decisión es apelable, sin efecto suspensivo, en el plazo de cinco (5) días hábiles.

Artículo 81. Suspensión extraordinaria de la ejecución

Tratándose de la ejecución de intereses o de monto liquidado en ejecución de sentencia, a solicitud de parte y previo depósito o carta fianza por el total ordenado, el juez puede suspender la ejecución en resolución fundamentada.

Artículo 82. Multa por contradicción temeraria

82.1 Si la contradicción no se sustenta en alguna de las causales señaladas en la norma procesal civil, se impone al ejecutado una multa no menor de media (1/2) ni mayor de cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

82.2 Esta multa es independiente a otras que se pudiesen haber impuesto en otros momentos procesales.

Artículo 83. Incumplimiento injustificado al mandato de ejecución

Tratándose de las obligaciones de hacer o no hacer si, habiéndose resuelto seguir adelante con la ejecución, el obligado no cumple, sin que se haya ordenado la suspensión extraordinaria de la ejecución, el juez impone multas sucesivas, acumulativas y crecientes en treinta por ciento (30%) hasta que el obligado cumpla el mandato; y, si persistiera el incumplimiento, procede a denunciarlo penalmente por el delito de desobediencia o resistencia a la autoridad.

Artículo 84. Cálculo de derechos accesorios

84.1 Los derechos accesorios a los que se ejecutan, como las remuneraciones devengadas y los intereses, se liquidan por la parte vencedora, la cual puede solicitar el auxilio del perito contable adscrito al juzgado o recurrir a los programas informáticos de cálculo de intereses implementados por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo o el Poder Judicial.

84.2 La liquidación presentada es puesta en conocimiento del obligado por el término de cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación. En caso de que la observación verse sobre aspectos metodológicos de cálculo, el obligado debe necesariamente presentar una liquidación alternativa.

84.3 Vencido el plazo el juez, con vista a las liquidaciones que se hubiesen presentado, resuelve acerca del monto fundamentándolo.

84.4 Si hubiese acuerdo parcial, el juez ordena su pago inmediatamente, reservando la discusión sólo respecto del diferencial.

84.5 Las pautas antes señaladas aplican de igual modo en la liquidación de los derechos individuales homogéneos y en la liquidación de los derechos y beneficios derivados de los laudos arbitrales económicos, tanto respecto de la parte devengada a la fecha de interposición de la demanda como respecto de la que se devengue por el correr del tiempo.

CAPÍTULO VIII
PROCESOS NO CONTENCIOSOS

Artículo 85. Consignación

La consignación de una obligación exigible requiere que el deudor efectúe previamente su ofrecimiento de pago.

Artículo 86. Contradicción a la consignación

El acreedor puede contradecir el efecto cancelatorio de la consignación en el plazo de cinco (5) días hábiles de notificado. Conferido el traslado y absuelto el mismo, el juez resuelve lo que corresponda o manda reservar el pronunciamiento para que se decida sobre su efecto cancelatorio en el proceso respectivo.

Artículo 87. Retiro de la consignación

87.1 El retiro de la consignación se hace a la sola petición del acreedor, sin trámite alguno, incluso si hubiese formulado contradicción.

87.2 El retiro de la consignación surte los efectos del pago, salvo que el acreedor hubiese formulado contradicción.

Artículo 88. Autorización judicial para ingreso a centro laboral

En los casos en que las normas de inspección del trabajo exigen autorización judicial previa para ingresar a un centro de trabajo, esta es tramitada por el inspector de trabajo o funcionario que haga sus veces. Para tal efecto debe presentar, ante el juzgado de paz letrado de su ámbito territorial de actuación, la respectiva solicitud. Esta debe resolverse, bajo responsabilidad, en el término de veinticuatro (24) horas, sin correr traslado. También podrá solicitarse y ordenarse el descerraje con auxilio de la fuerza pública.

Artículo 89. Entrega de documentos

La mera solicitud de entrega de instrumentos se sigue como proceso no contencioso siempre que ésta se tramite como pretensión única. Cuando se presente acumuladamente, se siguen las reglas establecidas para las otras pretensiones.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. En lo no previsto por esta Ley son de aplicación supletoria las normas del Código Procesal Civil, siempre que no sean contrarias a la naturaleza de los procesos regulados en esta norma.

SEGUNDA. Cuando la presente Ley hace referencia a los Juzgados de Paz Letrados de Trabajo, Juzgados Especializados de Trabajo y a las Salas Laborales, entiéndase que también se alude a los juzgados y salas mixtos.

TERCERA. Los procesos iniciados antes de la vigencia de esta Ley continúan su trámite según las normas procesales con las cuales se iniciaron.

CUARTA. Las tercerías de propiedad o de derecho preferente de pago, así como la pretensión de cobro de honorarios de los abogados, se interponen ante el juez de la causa principal y se tramitan conforme a las normas del proceso único laboral.

QUINTA. La conciliación administrativa es facultativa para el trabajador y obligatoria para el empleador. Se encuentra a cargo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el cual proporciona los medios técnicos y profesionales para hacerla factible.
El Estado, por intermedio de los Ministerios de Justicia y de Trabajo y Promoción del Empleo, fomenta el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos. Para tal fin, implementa lo necesario para la promoción de la conciliación extrajudicial pública o privada, y el arbitraje.

SEXTA. Las controversias jurídicas en materia laboral pueden ser sometidas a arbitraje, siempre y cuando el convenio arbitral se acuerdo después de la conclusión de la relación laboral y, adicionalmente, la remuneración mensual percibida sea, o haya sido, superior a las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP).

SÉTIMA. Las causas serán tramitadas por estricto orden cronológico de ingresos; sin embargo, los expedientes que por cualquier razón reingresen a los órganos jurisdiccionales también tendrán preferencia en su tramitación. Sin embargo, tendrán mayor preferencia en su tramitación los justiciables que tengan la calidad de madres gestantes y lactantes, discapacitados, menores de edad, adultos mayores, cuando se cuestione la protección del fuero sindical de los dirigentes sindicales y los que sufran de enfermedades terminales.

OCTAVA. La presente Ley entra en vigencia a los seis (6) meses de publicada en el Diario Oficial El Peruano, a excepción de lo dispuesto en las Disposiciones Transitorias, que entran en vigencia al día siguiente de su publicación.

NOVENA. Precísese que hay exoneración del pago de tasas judiciales para el prestador personal de servicios y las organizaciones sindicales cuando la cuantía demandada no

supere las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP), así como cuando las pretensiones son inapreciables en dinero.

DÉCIMA. Se autoriza al Poder Judicial la creación de un fondo de formación de magistrados y de fortalecimiento de la justicia laboral. El fondo tendrá por objeto la implementación de medidas de formación específicamente dirigidas a los magistrados laborales, así como el otorgamiento de incentivos que les permitan desarrollar de manera óptima la función judicial. El diez por ciento (10%) de las tasas y multas recaudadas en los procesos laborales, se destinará a dicho fondo.

UNDÉCIMA. Se crea el Registro de Empleadores que incumplan sus obligaciones laborales, que será publicitada y administrada desde la página web del Ministerio de Trabajo, con el carácter público.

El Juez Laboral de cualquier instancia que ejecute una sentencia consentida o ejecutoriada, deberá ordenar al Ministerio de Trabajo la publicación de la sentencia condenatoria laboral, señalando a las personas naturales o jurídicas que hayan participado en el acto lesivo declarado en la sentencia, así como sus integrantes, socios y/o representantes legales que incumplieron las obligaciones laborales al tiempo en que ocurrieron y los que hubieran mantenido tal injusticia, sin necesidad que haya sido o no demandado este extremo.

Para tal fin, el órgano jurisdiccional en la audiencia de ejecución de sentencia deberá requerir a la parte la parte vencida, la identificación de las personas que participaron en el acto lesivo, bajo apercibimiento de responsabilizar al funcionario de mayor jerarquía al momento del requerimiento.

Las personas naturales o jurídicas señaladas en el párrafo anterior, no podrán contratar con el Estado por el término de cinco años a partir de la inscripción de la sentencia condenatoria laboral.

Igualmente, los Procuradores del Estado en General tendrán la misma imposibilidad de contratar con el Estado, si su teoría del caso se ha basado o fundado en hechos falsos y/o sin privilegiar los tratados internacionales y normas constitucionales que versen sobre derechos fundamentales frente a las normas internas, o no haber observado la jerarquía de las fuentes del proceso laboral. Para determinar ello, los que se sientan perjudicados podrán demandar la suspensión o destitución del Procurador, mediante el Proceso de Tutela de Derechos Fundamentales.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS

PRIMERA. El Poder Judicial utiliza una red electrónica que permita la notificación de las resoluciones mediante correo electrónico y publicación simultánea en la página web del Poder Judicial. Los interesados solicitan al Poder Judicial la asignación de un domicilio electrónico, el cual opera como un buzón electrónico ubicado en el servidor. El acceso al buzón es mediante el uso de una contraseña localizada en la página web del Poder Judicial. Los procesos laborales se tramitan mediante el expediente judicial electrónico, salvo los casos en los que no sea posible su aplicación.

SEGUNDA. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la colaboración del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, implementa una base de datos públicos, actualizados permanentemente, que permita a los jueces y usuarios el acceso a la jurisprudencia y los precedentes vinculantes y que ofrezca información estadística sobre los procesos laborales en curso.

TERCERA. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con la colaboración del Poder Judicial, implementa un sistema informático, de acceso público, que permita el cálculo de los derechos o beneficios sociales.

CUARTA. Los jueces laborales y servidores autorizados del Poder Judicial, tendrán acceso al Sistema de Información de las Planillas Electrónicas, lo cual es administrada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

QUINTA. El Poder Judicial dispone la creación e instalación progresiva de juzgados y salas laborales en los distritos judiciales de la República que lo requieran, para fortalecer la especialidad laboral a efectos de brindar un servicio de justicia más eficiente.

SEXTA. El Poder Judicial aprueba los formatos de demanda para los casos de obligaciones de dar sumas de dinero cuyo monto no supere las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP).

SÉPTIMA. Las acciones necesarias para la aplicación de la presente norma se ejecutan con cargo a los presupuestos institucionales aprobados a los pliegos presupuestarios involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

OCTAVA. Los Procuradores del Estado y Abogados en general también tendrán responsabilidad administrativa, civil y penal (contra la administración de justicia y otros) cuando sus actos de defensa estén orientados a dilatar el proceso, y/o funden sus actos profesionales en evidentes hechos falsos y/o se basen en normas inexistentes o derogadas. En tal caso es deber del Magistrado imponer las multas correspondientes y

poner en conocimiento del Colegio de Abogados del que se encuentra inscrito el profesional, de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia correspondiente y del Ministerio Público si fuera el caso.

DISPOSICIONES MODIFICATORIAS

PRIMERA.- Modifíquense los artículos 42, 51 y la parte referida a la competencia de los juzgados de paz letrados en materia laboral del artículo 57 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por Decreto Supremo núm. 017-93-JUS, en los siguientes términos:

"Artículo 42.- Competencia de las salas laborales

Las salas laborales de las cortes superiores tienen competencia, en primera instancia, en las materias siguientes:

a. Proceso de acción popular en materia laboral.

b. Anulación de laudo arbitral que resuelve un conflicto jurídico de naturaleza laboral.

c. Impugnación de laudos arbitrales derivados de una negociación colectiva.

d. Conflictos de competencia promovidos entre juzgados de trabajo y entre éstos y otros juzgados de distinta especialidad del mismo distrito judicial.

e. Conflictos de autoridad entre los juzgados de trabajo y autoridades administrativas en los casos previstos por la ley.

f. Las demás que señale la ley.

Conocen, en grado de apelación, de lo resuelto por los juzgados especializados de trabajo.

Artículo 51.- Competencia de los juzgados especializados de trabajo

Los juzgados especializados de trabajo conocen de todas las pretensiones relativas a la protección de derechos individuales, plurales o colectivas originadas con ocasión de las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, formativa, cooperativista o administrativa, sea de derecho público o privado, referidas a aspectos sustanciales o conexos, incluso previos o posteriores a la prestación efectiva de los servicios.

Se consideran incluidas en dicha competencia las pretensiones relacionadas a:

a) El nacimiento, desarrollo y extinción de la prestación personal de servicios; así como a los correspondientes actos jurídicos.

b) La responsabilidad por daño emergente, lucro cesante o daño moral incurrida por cualquiera de las partes involucradas en la prestación personal de servicios, o terceros en cuyo favor se presta o prestó el servicio.

c) Los actos de discriminación en el acceso, ejecución y extinción de la relación laboral.

d) El cese de los actos de hostilidad del empleador, incluidos los actos de acoso moral y hostigamiento sexual, conforme a la ley de la materia.

e) Las enfermedades profesionales y los accidentes de trabajo.

f) La impugnación de los reglamentos internos de trabajo.

g) Los conflictos vinculados a un sindicato y entre sindicatos, incluida su disolución.

h) El cumplimiento de obligaciones generadas o contraídas con ocasión de la prestación personal de servicios exigibles a institutos, fondos, cajas u otros.

i) El cumplimiento de las prestaciones de salud y pensiones de invalidez, a favor de los asegurados o los beneficiarios exigibles al empleador, a las entidades prestadoras de salud o a las aseguradoras.

j) El Sistema Privado de Pensiones.

k) La nulidad de cosa juzgada fraudulenta laboral.

l) Las pretensiones originadas en las prestaciones de servicios de carácter personal, de naturaleza laboral, administrativa o de seguridad social, de derecho público.

m) Las impugnaciones contra actuaciones de la Autoridad Administrativa de Trabajo.

n) Los títulos ejecutivos cuando la cuantía supere las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP).

o) Otros asuntos señalados por ley.

Artículo 57.- Competencia de los Juzgados de Paz Letrados

Los Juzgados de Paz Letrados conocen:

(.)

En materia laboral:

a) De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP).

b) De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cien (100) Unidades de Referencia Procesal (URP);

c) De las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador.

d) De los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía."

SEGUNDA.- Modifíquense el artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones, aprobado por Decreto Supremo núm. 054-97-EF, en los siguientes términos:

"Artículo 38.- Proceso de ejecución

La ejecución de los adeudos contenidos en la liquidación para cobranza se efectúa de acuerdo al Capítulo V del Título II de la Ley Procesal del Trabajo. Para efectos de dicha ejecución, se establecen las siguientes reglas especiales:

(...)."

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA

ÚNICA. Se deroga la Ley 29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, así como sus modificatorias. Asimismo, se derogan los artículos 51 y 57 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobado por el Decreto Supremo 017-93-JUS, en lo referido a la competencia de los Juzgados Especializados de Trabajo y los Juzgados de Paz Letrado en materia laboral, así como todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente norma.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

PRIMERA. Adecuación

El Poder Ejecutivo adecúa las normas correspondientes, conforme a lo previsto en la presente ley, en un plazo máximo de 30 días calendario, contados a partir de su publicación en el diario oficial El Peruano, bajo responsabilidad.

SEGUNDA. Derogatoria

Quedan derogada toda norma que se oponga a lo dispuesto en la presente Ley.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por: BURGOS OLIVEROS Juan Bartolome FAU 20161749126 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 09/05/2025 18:48:39-0500

NIVARDO EDGAR TELLO MONTES
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA

Heidy Juárez Calle 49

PERÚ
CONGRESO de la REPÚBLICA

CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Lima, **16** de **mayo** de **2025**

Según la consulta realizada, de conformidad con el Artículo 77° del Reglamento del Congreso de la República: pase la Proposición **N° 11153/2024-CR** para su estudio y dictamen, a la (s) Comisión (es) de:

1. **JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.**

GIOVANNI FORNO FLOREZ
Oficial Mayor
CONGRESO DE LA REPÚBLICA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Fundamentación

El sistema procesal laboral peruano, está regido por la denominada Nueva Ley Procesal del Trabajo (Ley N°29497), promulgada el 15 de julio de 2010, la cual introdujo cambios importantes en la resolución de los conflictos laborales provenientes de una desigualdad en la relación laboral permanente.

La Ley N°29497, estableció principios como la inmediación, oralidad, concentración, celeridad, economía procesal, y, razonabilidad, así como, un rol protagónico del juez en el desarrollo e impuso del proceso, en búsqueda de la igualdad material de las partes de la relación laboral.

Sin embargo, pese a sus avances significativos, la Ley, aún no ha logrado consolidarse, y ha sido criticada por su falta de adaptación a las particularidades del sector público, la complejidad de ciertos procesos y la necesidad de mayor celeridad.

En ese sentido, la Ley presenta desafíos que requieren atención, como: la sobrecarga procesal, la dilación excesiva de los procesos, la insuficiente protección de los derechos colectivos y sindicales, y, la necesidad de adecuar los mecanismos procesales a las nuevas necesidades y progresividad de las relaciones laborales.

De allí que, surge la necesidad de establecer la creación de un Código Procesal Laboral que cautele los derechos fundamentales sin excepción, y, bajo aspectos técnicos repensados, a fin de que no se generen obstáculos para el acceso a la justicia o límites injustificados en la materialización de los derechos laborales fundamentales.

En ese contexto, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mediante Resolución Ministerial N°0103-2024-JUS, aprobó la publicación del proyecto de Código Procesal del Trabajo, el mismo que fue ingresado a mesa de partes del Poder Legislativo con fecha 18 de octubre de 2024, registrado como PL9249/2024-PE, y, decretado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, así como, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, para su análisis y dictamen.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

En ese sentido, cabe precisar que, el proyecto de ley formulado por el Ejecutivo, presenta ciertas disposiciones que, podrían suponer la vulneración de derechos laborales, como, por ejemplo:

- La conciliación prejudicial obligatoria; que podría constituirse en una barrera injustificada al acceso a la justicia, especialmente para los trabajadores de menores recursos.
- El proceso de tutela de derechos fundamentales; que podría generar la improcedencia de la acción de amparo en materia laboral, limitando el acceso de los trabajadores al Tribunal Constitucional en la defensa de sus derechos fundamentales.
- El tope de 12 remuneraciones en casos de reposición; que podría contradecir la naturaleza restitutoria de esta medida y beneficiar exclusivamente a los empleadores.
- La limitación a la protección colectiva; que podría debilitar la protección de estos derechos al limitar su alcance y establecer barreras procesales innecesarias.
- El establecimiento de criterios de competencia judicial complejas que podrían provocar dilaciones procesales significativas.
- La degradación de derechos para trabajadores en regímenes especiales, que podría transmitir un mensaje social inadecuado sobre la categorización de trabajadores.
- La omisión crítica de la protección efectiva del fuero sindical, la ejecución de laudos arbitrales económicos, la ejecución de resoluciones sobre suspensión perfecta y cese colectivo, y la calificación de la huelga por órgano judicial independiente.

Frente a estas deficiencias, el presente proyecto ofrece soluciones integrales que mantienen el objetivo de agilizar y modernizar la justicia laboral, sin sacrificar las garantías fundamentales de los trabajadores, como, por ejemplo:

- Un proceso único laboral simplificado, que regule de mejor manera el proceso único labora, eliminando complejidades innecesarias y garantizando un trámite expeditivo sin menoscabo del derecho de defensa.
- Un proceso de fuero sindical, que garantice la materialización de los derechos laborales, exigiendo una autorización judicial previa para la afectación de las condiciones laborales o el despido de trabajadores con fuero sindical.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe

- Un proceso colectivo, que tutele de derechos difusos, colectivos en sentido estricto e individuales homogéneos, fortaleciendo la protección colectiva de los derechos laborales.
- Un proceso de calificación de ilegalidad de la huelga, atendiendo a las recomendaciones de la OIT y la CIDH, a fin de garantizar los derechos laborales colectivos.
- La eliminación del límite resarcitorio en casos de reposición, que garantice la naturaleza restitutoria plena de la reposición.
- El fortalecimiento de medidas cautelares, especialmente para casos de fuero sindical, trabajadoras gestantes o lactantes, menores de edad y personas con discapacidad.
- El fortalecimiento de la ejecución procesal, con especial atención a la ejecución de laudos arbitrales económicos y resoluciones sobre suspensión perfecta o cese colectivo.

Efecto de la vigencia de la norma sobre la legislación nacional

La presente iniciativa legislativa está formulada dentro del marco constitucional, por lo que no vulnera su texto en modo alguno; sino por el contrario, materializa su justa aplicación.

Así mismo, la aprobación de la presente iniciativa implicara entre otros efectos: la derogación de la Ley N°29497, Nueva Ley Procesal del Trabajo, la modificación de los artículos 42, 51 y 57 del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la modificación del artículo 38 del Texto Único Ordenado de la Ley del Sistema Privado de Administración de Fondos de Pensiones.

Estas modificaciones contribuyen a la coherencia y sistematicidad del ordenamiento jurídico laboral peruano, armonizando las normas procesales con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por el Perú en materia de protección de derechos laborales.

Análisis Costo Beneficio

El siguiente cuadro grafica el costo beneficio de la presente iniciativa:

Beneficios	Costos
1. *Mejora sustancial del acceso a la justicia laboral, especialmente para trabajadores vulnerables.*	1. *Capacitación de magistrados y personal judicial en las nuevas disposiciones procesales.*
2. *Mayor eficiencia y celeridad procesal sin menoscabo de garantías fundamentales.*	2. *Adecuación de sistemas informáticos para el seguimiento de los nuevos procedimientos.*
3. *Fortalecimiento de la protección de derechos colectivos y sindicales.*	3. *Publicidad e información para litigantes y público en general.*
4. *Reducción de la conflictividad social al ofrecer mecanismos efectivos de resolución de conflictos laborales.*	
5. *Alineamiento con estándares internacionales en materia de administración de justicia laboral.*	

Vinculación con el acuerdo nacional

La presente iniciativa legislativa tiene vinculación directa con las siguientes políticas del Acuerdo Nacional:

Política 1: Fortalecimiento del Régimen Democrático y del Estado de Derecho;

Política 24: Afirmación de un Estado Eficiente y Transparente;

Política 28: Plena Vigencia de la Constitución y de los Derechos Humanos y Acceso a la Justicia e Independencia Judicial.

Av. Abancay N°251–Lima
Jr. Grau N°439 –Trujillo
www.jburgos@congreso.gob.pe